

ECOSISTEMAS DEMOCRÁTICOS BAJO PRESIÓN:

*la integridad electoral frente
a la desinformación y la
violencia política de género.
Un protocolo de acción.*



Cartagena

Este evento es co-auspiciado por





"Esta publicación cuenta con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de IDEA Internacional y no refleja necesariamente la postura de la AECID."



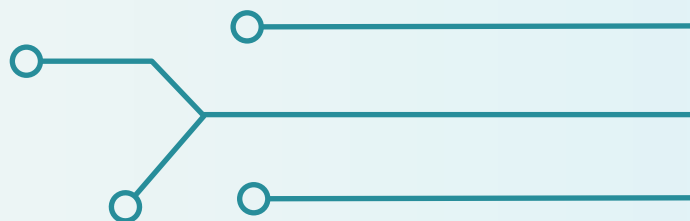
Resumen Ejecutivo

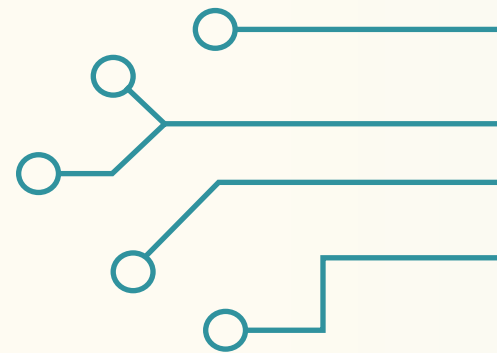
La expansión de la política digital ha reconfigurado los riesgos que enfrentan las democracias latinoamericanas. La desinformación, la violencia política de género digital (VPGD) y el deterioro del espacio cívico se han convertido en amenazas estructurales que afectan tanto la igualdad en la competencia electoral como la confianza ciudadana en las instituciones. Los hallazgos centrales del análisis revelan un ecosistema informativo marcado por la aceleración tecnológica, la fragmentación del debate público y la creciente dificultad para sostener una realidad compartida.

La desinformación dejó de ser un fenómeno periférico para integrarse en estrategias profesionales de comunicación, alimentadas por minería de datos, segmentación fina de audiencias e incentivos algorítmicos que privilegian la viralidad. La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha multiplicado su escala y sofisticación, reduciendo costos y aumentando la credibilidad de contenidos manipulados. La información falsa circula con mayor

rapidez que la verdadera, arraigándose en comunidades emocionales donde refuerza sesgos, identidades y polarización. Sus efectos van desde la erosión de la deliberación democrática hasta la instalación de sospechas de fraude antes de los procesos electorales, debilitando la autonomía del voto y distorsionando la legitimidad electoral.

La violencia política de género digital es otra dimensión crítica del fenómeno. Esta opera como un dispositivo de exclusión que combina misoginia, racismo, lesbofobia y transfobia para delimitar quién puede hablar y bajo qué condiciones. Sus repertorios incluyen campañas coordinadas de difamación, *doxxing*, sexualización encubierta, linchamientos digitales, suplantación de identidad y *deepfakes* dirigidos a erosionar credibilidad. Las consecuencias sobre las víctimas son profundas: ansiedad, retraimiento, autocensura, desgaste emocional y renuncia a espacios de representación, lo que empobrece la diversidad del debate público.





Hacer frente a estos desafíos requiere de la colaboración del ecosistema de actores relacionados con la integridad electoral. Solo una respuesta integral que articule el trabajo de instituciones electorales, judiciales, partidos políticos, medios de comunicación, plataformas digitales, academia, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general puede estar a la altura de los nuevos tiempos. La resiliencia democrática depende de reconstruir confianza, proteger la igualdad política y garantizar un ecosistema informativo donde todas las voces puedan deliberar sin miedo y con información íntegra. Este fue el propósito del Encuentro Regional sobre Integridad Electoral, Desinformación y Violencia Política de Género, organizado por IDEA Internacional con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el marco del proyecto *Fortalecimiento de los Ecosistemas de Integridad Electoral para la Protección de la Democracia en América Latina*, y que contó con el coauspicio del Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, a través del proyecto *Mejorando la resiliencia democrática en Centroamérica*.

El Encuentro Regional concluyó con la elaboración de un decálogo para orientar la acción ante los retos del presente y futuro:

- Construir comunidades de acompañamiento y cuidado colectivo, que desplacen la carga desde las víctimas de violencia política de género hacia los agresores y aseguren apoyo psicológico integral, legal y territorial.
- Retomar la capilaridad social mediante campañas de sensibilización con enfoque territorial, lenguajes inclusivos y alianzas con escuelas, radios comunitarias y espacios locales.
- Crear una comisión interinstitucional permanente para enfrentar la desinformación y la violencia política de género en la esfera digital.
- Institucionalizar la educación digital temprana como política de Estado, entregando a niñas, niños y jóvenes herramientas para identificar manipulación, odio y sesgos.
- Establecer un espacio formal de negociación y coordinación con plataformas digitales que



permita acordar condiciones mínimas de trazabilidad, acceso a datos y rutas de emergencia durante procesos electorales.

- Fortalecer el periodismo colaborativo y territorial, integrando educación cívica y verificación contextualizada para reconstruir la confianza pública.
- Documentar sistemáticamente el trabajo de las autoridades electorales para evitar manipulaciones narrativas
- Crear observatorios ciudadanos con métricas comparables

sobre desinformación y violencia de género.

- Garantizar transparencia activa mediante acceso abierto a actas, auditorías y datos de financiamiento.
- Impulsar acuerdos multiactor para una gobernanza democrática del espacio digital, que articulen a Estado, plataformas, medios, academia, organizaciones de mujeres y sociedad civil bajo principios comunes de trazabilidad, derechos humanos y perspectiva de género.



Introducción

Las democracias de nuestro tiempo atraviesan un escenario marcado por presiones simultáneas en diferentes esferas institucionales, económicas y sociales. El Informe “Global State of Democracy 2025” de IDEA Internacional mostró que el último año más de la mitad de los países experimentaron retrocesos en algún factor de la democracia (54%) frente a un 32% que registró avances. El Estado de derecho se debilita, la libertad de prensa enfrenta su mayor declive en décadas y la violencia política de género en la esfera digital se ha consolidado como una forma sistemática de exclusión. En paralelo, la desinformación se ha vuelto más sofisticada al momento de sembrar dudas sobre la realidad y ha proliferado como herramienta de amplificación de la polarización política. América Latina no es una excepción a estas tendencias, muchas de estas tensiones se expresan con particular intensidad en una esfera pública cuyos mecanismos tradicionales de intermediación han perdido legitimidad.

Fue en este contexto que se llevó a cabo el Encuentro Regional sobre Integridad Electoral,

Desinformación y Violencia Política de Género en Cartagena de Indias, los días 15 y 16 de octubre de 2025. Durante dos días, representantes de organismos electorales, medios de comunicación, academia, sociedad civil y plataformas de diez países reflexionaron sobre estos desafíos comunes. El diálogo dejó en evidencia que proteger la integridad electoral en la era digital exige anticipar riesgos, coordinar capacidades y comprender las elecciones como parte de un ecosistema donde interactúan instituciones, actores políticos, plataformas tecnológicas y culturas cívicas. El propósito de este documento es sintetizar esas reflexiones.



"La integridad electoral es el núcleo de la democracia ... La democracia va más allá de las elecciones, pero sin elecciones no hay democracias representativas. Por eso debemos protegerlas en sus múltiples dimensiones".

Marcela Ríos, Directora Regional para América Latina y el Caribe, IDEA Internacional.

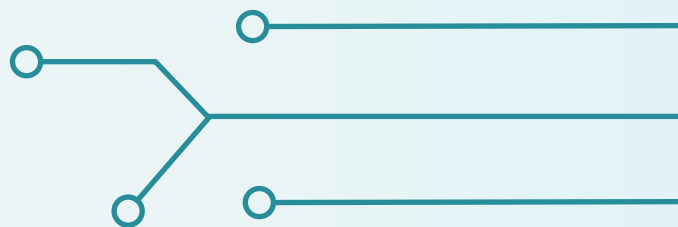
“

Para el abordaje de desafíos transversales de nuestros tiempos: el impacto de la IA generativa y la desinformación en los procesos democráticos y las manifestaciones de violencia digital de género hacia mujeres políticas necesitamos trabajar con todo el ecosistema en la construcción de confianza, que es un activo principal para la integridad electoral y la democracia”.

Alejandra Sepúlveda, Gerenta de Proyecto Integridad Electoral y Género RLAC, IDEA Internacional.

A partir de un enfoque cualitativo basado en la observación directa y el trabajo de campo, la presente síntesis captura la densidad del intercambio en el Encuentro, procurando mantener el sentido original de las intervenciones de los participantes bajo un marco analítico común. Los hallazgos presentados deben entenderse como orientaciones abiertas, complementarias y adaptables a cada contexto nacional. El objetivo final es contribuir a la resiliencia de la integridad electoral frente a las transformaciones aceleradas de la democracia en la región.





La política en la era de la desinformación

La digitalización de la política ha traído oportunidades y retos para las democracias. Por un lado, ha expandido el acceso a la información oficial, fortalecido la transparencia y ampliado los canales de participación. Por otro lado, ha hecho realidad un problema que en el pasado parecía imposible, la masividad y la velocidad de los contenidos en línea ha enfrentado a la ciudadanía a un entorno saturado

que supera con creces la capacidad humana. Se trata de la manifestación visible del lema cantidad no es igual a la calidad, pues tal abundancia ha hecho de internet un terreno fértil para la proliferación de la desinformación.

El canal de circulación predominante de la desinformación en la era digital son las plataformas digitales. En aquellas redes abiertas, resulta visible ante todos y por ello es más sencillo identificarla. Sin embargo, la desinformación también circula en espacios cerrados como grupos





cifrados de comunicación o comunidades privadas que escapan del monitoreo institucional y permanecen fuera del radar. Similar a un iceberg, lo que vemos siempre es una porción de todo lo que se mantiene oculto.

Pero en ambos casos, el elemento común es la explotación de las brechas algorítmicas que moldean la atención pública, condicionando qué contenidos son vistos. Al priorizar el impacto sobre criterios éticos o de veracidad, la información precisa está en desventaja estructural frente a


contenido falso diseñado con el propósito específico de captar la atención inmediata y estimular la respuesta emocional rápida.

Las dinámicas del consumo de información en las plataformas también potencian la difusión de la desinformación a un ritmo más rápido y un alcance más amplio que el contenido verídico. Nuestra relación con la información se ha vuelto fragmentada, veloz y superficial. En el ámbito noticioso, esto se expresa en la lectura anticipada de titulares, impresiones instantáneas y fragmentos fuera de



"Las fake news no solo afectan la percepción pública, pueden provocar conflictos reales. Necesitamos un sistema de defensa que combine tecnología, pedagogía y regulación".

Mario Riorda, Politólogo, Especialista en procesos electorales, Argentina.



contexto que conducen a una respuesta rápida. Lo central es generar interacción, y las técnicas de desinformación se han vuelto especialistas en ello.

Además del diseño de las plataformas digitales y sus políticas algorítmicas, la desinformación es efectiva porque potencia los sesgos cognitivos y las afinidades ideológicas y afectivas de las personas. Por esta razón logra insertarse en comunidades simbólicas de sentido donde las emociones actúan como el principal motor de acción. Las piezas desinformativas buscan activar sistemas de pensamiento rápido a través de emociones movilizadoras como la rabia, el miedo o la indignación. Así, logra ser compartida antes de que el tiempo permita su procesamiento adecuado. Para ello, suele desplegarse a partir de etapas relativamente estables como la simplificación del conflicto mediante una narrativa binaria que plantea un “nosotros” virtuoso contra un “ellos” corrupto. Luego desacredita voces moderadas o matices. Finalmente, cumple su objetivo cuando es replicada por medios tradicionales o vocerías políticas, adquiriendo legitimidad institucional.



"Las narrativas de desinformación van de la mano con la instrumentalización de las emociones y la promoción de mensajes de odio como el racismo, el clasismo y el machismo en las plataformas".

Ana María Saavedra, Fundación GABO, Colombia.

La desinformación no opera en una lógica argumentativa, se impone por saturación. La repetición genera familiaridad e instala la duda como un estado permanente. Este efecto se refuerza cuando la narrativa falsaz incorpora elementos verdaderos que reducen las barreras de incredulidad inicial. Al presentar datos fuera de contexto, desactualizados o editados, produce interpretaciones que parecen plausibles. Este contexto ha sido potenciado por la irrupción de la IA generativa, que facilita la creación de desinformación a gran escala, bajo costo y con niveles inéditos de realismo. Nunca había sido tan fácil producir audios falsos, imágenes manipuladas o videos sintéticos, como hemos visto en campañas electorales con encuestas apócrifas, discursos inventados o fotografías adulteradas.



"En un contexto de crecientes restricciones al acceso a la información, campañas de desinformación y criminalización del ejercicio periodístico, los medios siguen siendo un contrapeso esencial para la democracia. Sin embargo, enfrentan amenazas diferenciadas —particularmente las mujeres periodistas, blanco de violencia digital y ataques de género— y serias limitaciones financieras que ponen en riesgo su independencia. Responder a estos desafíos exige enfoques con perspectiva de género, mayor colaboración, fortalecimiento institucional e innovación tecnológica al servicio del periodismo de investigación".

Blanca Blanco, Gerente de Proyecto, Centroamérica, IDEA Internacional.

Hemos visto en muchos casos entramados económico-políticos que operan como verdaderas cadenas de producción de la desinformación en los últimos años. En ellos participan agencias de marketing político, consultoras de datos, influencers, militantes, pseudo-medios y comunidades cerradas que generan contenido de forma continua y adaptada a las lógicas de cada plataforma. Este escenario ha alterado las cadenas clásicas de intermediación, pues la comunicación política se ha convertido en un goteo permanente de microcontenidos que sedimentan percepciones sin necesidad de grandes anuncios. La esfera pública se fragmenta en múltiples micro-esferas con narrativas propias, potenciadas por técnicas de segmentación que permiten ajustar mensajes desinformativos a identidades específicas.

Esto tiene profundos y variados efectos sobre la democracia. Partiendo por la erosión de derechos fundamentales que afectan desproporcionadamente a mujeres, disidencias, periodistas y liderazgos sociales al potenciar la VPGD con campañas de acoso masivo. La desinformación impide el igual derecho a participar en la política y debilita la deliberación al reemplazar el intercambio argumentativo por la confrontación y la pérdida de un horizonte de realidad compartida entre ciudadanos. Siendo la expresión más preocupante de este fenómeno la instalación de sospechas preventivas de fraude electoral sin pruebas que dañan la integridad de todo el proceso electoral.

La capacidad de respuesta de los Estados a este problema es limitada porque las asimetrías de poder entre gobiernos y grandes

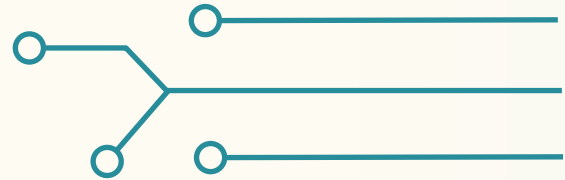


plataformas, muchas con ingresos superiores al presupuesto de numerosos Estados, dificultan la regulación efectiva. La trazabilidad en circuitos cifrados es prácticamente imposible para la mayoría de las administraciones; y muchas regulaciones no dan herramientas a los Estados para proteger el entorno informativo en línea. Además, la desinformación se vincula directamente con derechos fundamentales como el de expresión y asociación, por lo que cualquier intervención debe ser proporcional y respetuosa del enfoque de derechos humanos para evitar que su contención sea una excusa para la censura.

Eliminar la desinformación es una tarea imposible y puede requerir un nivel de vigilancia inaceptable, pero sus efectos negativos pueden limitarse. El fin debe ser proteger el espacio común donde la democracia se ejerce. Se trata de aumentar el costo de la desinformación, reducir su eficacia y fortalecer la resiliencia democrática. La gobernanza democrática del ecosistema informativo requiere equilibrar trazabilidad y responsabilidad con la protección de libertades. Las respuestas más prometedoras se orientan a fortalecer la resiliencia

del ecosistema electoral y de información. La innovación tecnológica puede ser aliada, como muestran experiencias de depuración automatizada de padrones en Perú o iniciativas de monitoreo digital, detección temprana y comunicación transparente en México o Brasil.

De estas experiencias se desprenden condiciones esenciales como marcos normativos actualizados, capacidades técnicas robustas, cooperación interinstitucional efectiva y estrategias de comunicación anticipatoria. No obstante, cualquier política será insuficiente si no aborda condiciones estructurales como brechas educativas, digitales e institucionales. La integridad democrática requiere alianzas amplias y legitimadas entre órganos electorales, medios, universidades, plataformas y sociedad civil, incorporando perspectiva de género. Del mismo modo, fortalecer la ciudadanía mediante educación cívica y alfabetización mediática es fundamental para formar subjetividades capaces de resistir manipulación emocional.



El papel de las plataformas digitales

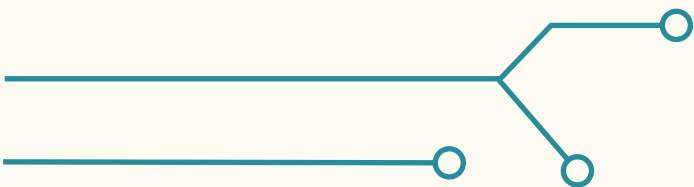
Las plataformas digitales se han consolidado como una infraestructura central de la conversación pública. La conectividad ha permitido una ampliación de la vida democrática al descubrir nuevas formas de participación y escrutinio público. Sin embargo, también se ha hecho evidente que pueden degradar el debate público, distorsionar la competencia política y amplificar desigualdades preexistentes. La defensa de la integridad electoral exige cooperación transversal y una comprensión fina de las lógicas que configuran la conducta política en línea. Para ello, las plataformas tienen un papel protagónico.

La desinformación ha dejado de ser un patrimonio exclusivo de actores marginales. Se trata de discursos que han sido internalizados por el propio sistema político y mediático, desplazando la imagen clásica de campañas clandestinas hacia dinámicas donde figuras públicas, plataformas de alto alcance e *influencers* politizados moldean narrativas con fuerte carga emocional. En este entorno, el entrelazamiento entre re-

des sociales y medios tradicionales ha erosionado la frontera entre hechos, opiniones y especulaciones. Rumores diseñados para captar atención encuentran eco en ciertos segmentos del periodismo que, aun sin intención, los replican y elevan a estatus noticioso, generando ciclos de amplificación que otorgan verosimilitud a contenidos falsos y los proyectan a la esfera institucional. Las plataformas operan aquí como cámaras de resonancia donde la visibilidad se convierte en una forma de validación de un nuevo ecosistema informativo.

Frente a ese escenario, algunos organismos electorales han comenzado a desarrollar estrategias de reacción temprana que buscan anticipar o contrarrestar las falsedades. La experiencia del sistema CERTEZA del Instituto Nacional Electoral (INE) de México fue destacada como referencia regional al combinar monitoreo en tiempo real, coordinación con verificadores y mecanismos de verificación cruzada para evitar instrumentalizaciones del fact-checking. Mientras que herramientas como el chatbot INÉS en WhatsApp muestran el potencial de la colaboración público-plataformas para poner a disposición de la ciudadanía canales directos de información confiable.





Sin embargo, la relación entre las plataformas digitales y la cultura de la verificación también ha estado marcada por vaivenes. En los últimos años, muchas plataformas que antes invertían en programas de fact-check profesional han reducido o desmantelado sus equipos especializados, debilitando canales de coordinación que resultaban esenciales, al reemplazarlos por políticas centradas en el monitoreo de la comunidad. Esta retirada puede ser contraproducente porque ocurre cuando la desinformación es más compleja y, por tanto, difícil de rectificar.

La cuestión de fondo que emerge de estas situaciones es si la responsabilidad de las plataformas frente a la integridad informativa puede seguir siendo voluntaria. Sus recursos y escala superan con creces a los de la mayoría de las instituciones públicas. Su falta de transparencia algorítmica impide comprender qué contenidos se amplifican, bajo qué criterios y con qué efectos, generando una opacidad que condiciona la formación de opinión sin escrutinio democrático. Y, en la medida que prima la autorregulación, muchas de ellas tienden a priorizar otra clase de problemas.

Aquí es donde la capacidad desigual de negociación también limita las respuestas. Mientras que plataformas priorizan acuerdos con grandes mercados nacionales, muchos organismos electorales de la región carecen de herramientas para exigir condiciones equivalentes en cooperación, acceso a datos o moderación. Esto evidencia la necesidad de impulsar mecanismos regionales que permitan respuestas coordinadas y estándares mínimos de trazabilidad durante los procesos electorales.

La pregunta, entonces, no es si las plataformas son parte del problema o de la solución, sino bajo qué condiciones pueden contribuir a un ecosistema informativo robusto. Su rol es inevitable como infraestructura de la deliberación. La diferencia es que funcionen como vectores de manipulación o como aliadas de la integridad electoral. Ello requiere un marco de principios compartidos, mayor transparencia, cooperación estructurada y canales permanentes de diálogo. La democracia no puede delegar en las plataformas toda la responsabilidad de proteger el debate público, pero tampoco puede prescindir de ellas.

“

"La inteligencia artificial obliga a replantear las estrategias: no solo para producir contenidos, sino también para fortalecer la verificación y la detección de narrativas falsas".

Alfonso García, Subdirector de Síntesis y Monitoreo Informativo, INE México.



- ★ Cómo afecta la democracia?
- ★ En qué narrativa se enmarca?
- ★ Qué actores participaron o se vieron afectados?
- ★ Cuáles emociones y sesgos activo?



Violencia política de género digital: la persistente amenaza bajo el radar

Aunque hemos tomado conciencia sobre los profundos cambios de la transformación digital sobre la democracia y la forma en que vivimos la política, no siempre ha habido una reflexión que nos lleve a una comprensión equivalente sobre su impacto en los derechos fundamentales de las personas. Tomarse en serio la era digital nos lleva a reconocer que las fronteras entre lo virtual y lo físico son porosas. Se trata de dos esferas conexas, que se retroalimentan. Así, lo que ocurre en las plataformas digitales produce efectos concretos en la vida de las personas y viceversa. Por eso, la VPGD no puede minimizarse por su carácter “virtual”, se trata de violencia con todas sus letras, posee una lógica propia y se ha convertido en una de las formas más persistentes, insidiosas y difíciles de contrarrestar.

Es justo reconocer que la VPGD no nace junto a las plataformas digitales. Ellas solo amplifican

jerarquías históricas profundamente arraigadas en las sociedades por décadas, incluso siglos. Lo que vemos es la actualización tecnológica de sistemas de dominación preexistentes, reconfigurados mediante incentivos algorítmicos que premian la viralidad del agravio. De esta manera, la VPGD constituye un dispositivo de exclusión que articula misoginia, racismo, lesbofobia y transfobia para deslegitimar la presencia pública de quienes desafían las expectativas tradicionales del poder. Su operación busca determinar quién puede hablar y bajo qué condiciones, reinstalando límites informales de pertenencia al espacio democrático.

Las manifestaciones de la VPGD son variadas y, cada vez, más sofisticadas como campañas de difamación masivas, *doxxing*, sexualización encubierta de sátira, linchamientos digitales amplificados por redes de cuentas falsas, suplantación de identidad, *deepfakes* dirigidos a erosionar credibilidad o desinformación con sesgo de género, entre otros. Estas son tan solo algunas de sus formas, pues puede adoptar una gran variedad de ellas. El crecimiento de la IA generativa ha abierto las

“

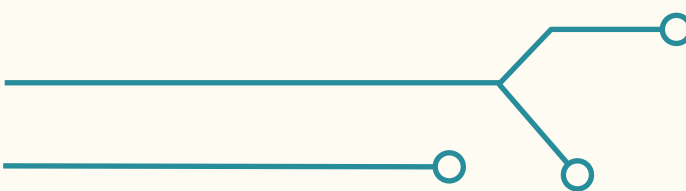
"En un contexto de alta inestabilidad política, toda forma de violencia erosiona la democracia y debilita la confianza ciudadana en las instituciones electorales".

Mayra Nieto, Jefa de la Oficina General de Comunicaciones e Imagen, Jurado Nacional de Elecciones, Perú.

puertas a un nuevo conjunto de técnicas debido a la producción de contenido hiperrealista, por lo que podemos esperar nuevos tipos de VPGD en el futuro. Ante ello, debemos constatar que, si bien existen ataques realizados por individuos específicos, con mayor frecuencia la VPGD responde a dinámicas organizadas que se intensifican en períodos de alta exposición política, como elecciones o debates. La arquitectura digital potencia esta violencia, al generar incentivos para la repetición, el anonimato y la replicabilidad instantánea.

Resulta preocupante cómo muchas formas de VPGD pasan del radar o son legitimadas en el discurso público. Una respuesta frecuente de quienes la ejercen es justificar su conducta en nombre de la crítica amparada en la libertad de expresión. Pero la crítica política legítima se dirige al





desempeño público, mientras que la violencia simbólica ataca rasgos identitarios sin relación con dicho desempeño como la apariencia física, vida privada, maternidad, edad, emocionalidad o el tono de voz. Esta clase de ataques son dirigidos casi exclusivamente a mujeres y disidencias, revelando que el verdadero blanco no es la acción política, sino su identidad.

Lo mismo ocurre con el humor. La sátira es parte de la vida democrática, pero también puede convertirse en instrumento de violencia cuando ridiculiza cuerpos, afectos o formas de estar en el espacio público de sectores históricamente excluidos de la esferas de poder. La línea divisoria no está en el recurso humorístico, sino en la dirección y el efecto de la burla. Naturalizar la agresión bajo el pretexto de la broma resta gravedad al daño, dificulta la respuesta institucional y deslegitima las experiencias de las víctimas.

La VPGD tiene consecuencias profundas, deteriora la vida cotidiana de manera sostenida generando ansiedad, insomnio, autocensura, retraimiento social y la renuncia a espacios de visibilidad política. La huella digital amplifica ese deterioro pues lo que se publica



"El efecto de la violencia digital en la mente de las personas es una realidad, no una ficción. Su objetivo es expulsar, silenciar, castigar, disuadir y disciplinar".

Paula Escobar, Periodista CNN Chile,
Directora Cátedra Mujeres y Medios de
la Universidad Diego Portales.

en internet permanece indefinidamente, multiplicando el daño y dificultando cualquier forma de reparación. Muchas mujeres y disidencias optan por retirarse de redes o suspender actividades públicas para proteger su integridad emocional y física. Pero este retraimiento no es una decisión libre, se trata de una reacción forzada ante un entorno hostil que afecta tanto a la persona atacada como a su círculo y a la democracia misma, al empobrecer el pluralismo y reducir el espectro de voces que conforman el debate público.

Comprender la VPGD requiere situarla dentro de un marco estructural. Intuitivamente podría suponerse que aumenta en conjunto a los niveles de representación política femenina como una reacción cultural a su presencia. Sin embargo, la evidencia muestra que su intensidad

es relativamente constante, independientemente de los niveles de paridad. Países con altos estándares de representación femenina registran niveles similares de agresión digital a aquellos donde las mujeres siguen subrepresentadas. Esto demuestra que la mera inclusión institucional no altera el fenómeno, ya que no transforma la cultura política. La visibilidad femenina implica costos personales elevados y, en ocasiones, riesgos adicionales en entornos partidarios que carecen de protocolos internos y donde persisten lógicas normalizadas de agresividad, sintetizadas en expresiones como “la política es sin llorar”.

En estos casos, la VPGD se muestra como un dispositivo de exclusión de

quienes no son consideradas dignas de estar en el espacio público. Y aunque esto vulnere el principio democrático de una ciudadanía libre e igual para todas las personas, las respuestas legislativas en la región siguen siendo incipientes. Los marcos normativos suelen ser fragmentarios o inexistentes en lo que respecta a la esfera digital como tema específico, lo que reduce la capacidad de acción de organismos electorales al enfrentar restricciones presupuestarias, presiones políticas, tensiones de autonomía o límites al interpretar las leyes disponibles.

No obstante, algunos países han avanzado en la consolidación de una justicia electoral sensible al género mediante precedentes



evento es co-auspiciado por

VOZ PÚBLICA

Modera: Paula Escobar, Periodista CNN Chile y Directora de Cátedra Mujeres y Medios de la Universidad Diego Portales



jurisprudenciales, pactos de integridad, sanciones por agresiones y programas de liderazgo seguro. México, Costa Rica y Panamá son ejemplos de instituciones que han mostrado capacidad transformadora, pero el impacto de sus medidas sigue siendo parcial o incipiente. La magnitud estructural del problema supera la capacidad de respuesta aislada de las instituciones y está por verse a largo plazo si las estrategias nacionales darán efectos futuros.

Tal como ocurre con la desinformación, la VPGD está condicionada por la profunda asimetría entre los Estados y las grandes plataformas digitales. Estas concentran acceso a datos, fijan criterios de moderación,

diseñan algoritmos, determinan qué es visible y bajo qué lógica circula la información. Su opacidad operativa dificulta diagnósticos confiables y limita la capacidad estatal para proteger derechos fundamentales, por lo que sin regulaciones efectivas y con mecanismos voluntarios de cooperación en retroceso, aspectos esenciales del bienestar ciudadano quedan supeditados a decisiones comerciales y a políticas internas sin mecanismos públicos de auditoría.

La VPGD no puede ser abordada como una suma de incidentes individuales. Cada ataque expresa la interacción de estereotipos persistentes, vacíos regulatorios, incentivos algorítmicos, sesgos mediáticos y estructuras partidarias poco trans-

formadas. Por ello, su tratamiento requiere un enfoque holístico que articule prevención, acompañamiento, sanción, alfabetización digital crítica y cooperación interinstitucional. Mientras siga concebida como un problema de conducta o convivencia, y no como síntoma de una falla estructural de la democracia, no podrá ser contenida.

La conciencia de este problema ha aumentado paulatinamente, por ello diversos países de la región han comenzado a ensayar respuestas integrales para enfrentarla. Las experiencias presentadas en el Encuentro Regional muestran que, aun cuando la VPGD opera mediante incentivos algorítmicos, estereotipos persistentes y dinámicas partidarias que hacen difícil su abordaje, existen estrategias posibles dentro de los marcos vigentes. El caso del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú es ilustrativo de esto. Ante un escenario donde la mayoría de las candidatas declara haber sufrido acoso digital, en buena parte proveniente de sus propios partidos, el JNE ha desarrollado campañas públicas, capacitaciones y protocolos de atención, entendiendo la comunicación institucional como una forma de acción política destinada a

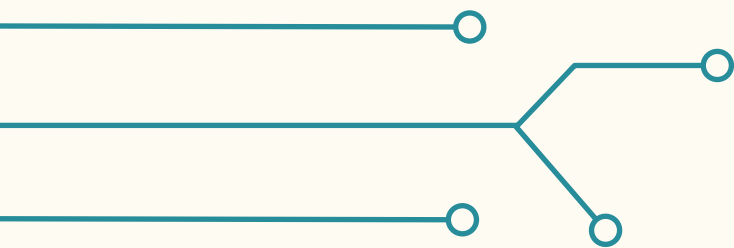


"Muchas respuestas a la violencia digital hoy no pasan por el sistema de justicia, sino por el desarrollo de prácticas más seguras dentro de las propias plataformas".

Alicia Reynoso, Coordinadora del Programa Internet Feminista, Luchadoras, México.

contrarrestar narrativas misóginas y legitimar la presencia de las mujeres en la vida pública.

La región también muestra señales de avance en justicia electoral. La anulación de la elección municipal de Irimbo en Michoacán durante 2024 en México marca un punto de inflexión. Fue la primera vez que un tribunal invalidó una elección por una campaña sistemática de VPGD, reconociendo que la violencia simbólica y digital puede distorsionar la equidad de la contienda y comprometer la legitimidad del resultado. Este precedente, junto con la consolidación de registros públicos de agresores como los implementados por el INE y la aplicación de la ley "8 de 8", que impide postular o ejercer cargos públicos a personas que tengan sentencias firmes o sanciones vigentes por ocho tipos de conductas graves en materia de géne-



ro.¹ Estas medidas revelan la creación de un marco de responsabilidad holístico en México que documenta patrones, disuade agresores y establece estándares democráticos sobre lo tolerable en la competencia política.

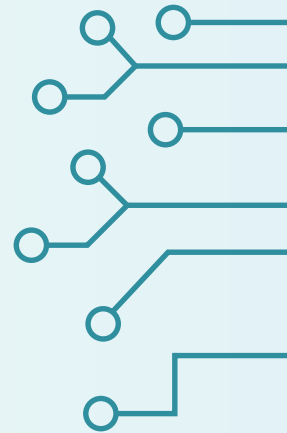
Algunos países no cuentan con una legislación que trate explícitamente la VPGD dentro de sus ordenanzas o, bien, la incorpora de manera parcial. En estos casos, la interrogante procesal es cómo responder a nuevas formas de violencia no reconocidas en el orden del derecho, pero que sí afectan derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional y jurídico. Allí es donde algunas instituciones han incorporado un deber reforzado de diligencia, reconociendo que la violencia opera en contextos desiguales, y que los mandatos generales de la legislación pueden ser interpretados a la luz de tales variaciones para intervenir justificadamente en casos concretos; o bien, tomar otra clase de medidas que no requieren nueva legislación dentro de sus facultades administrativas como capacitaciones al funcionariado, talleres para partidos y periodistas,

campañas de alfabetización digital y guías de buenas prácticas comunicacionales.

Los medios de comunicación también emergen como actores esenciales. Su tarea no se limita a verificar datos, sino a evitar reproducir el agravio y desmontar los marcos narrativos que naturalizan la exclusión. La ética periodística debe traducirse en decisiones editoriales que resistan la lógica algorítmica del escándalo, diversifiquen fuentes, incorporen perspectiva de género y abandonen coberturas que convierten la violencia en un espectáculo. Ante ello, la academia y la sociedad civil pueden complementar estos esfuerzos mediante observatorios, foros y metodologías de seguimiento que produzcan evidencia para el público.

Asimismo, los organismos de control cumplen un papel preventivo central. La articulación de fiscalías, autoridades electorales, sociedad civil y plataformas digitales ha demostrado ser efectiva en proyectos como la construcción de sistemas de alerta temprana en Brasil y México que detectan

¹ Entre ellas: violencia familiar, violencia política contra las mujeres en razón de su género, delitos sexuales, incumplimiento de pensiones alimenticias y otros actos que vulneran derechos fundamentales.

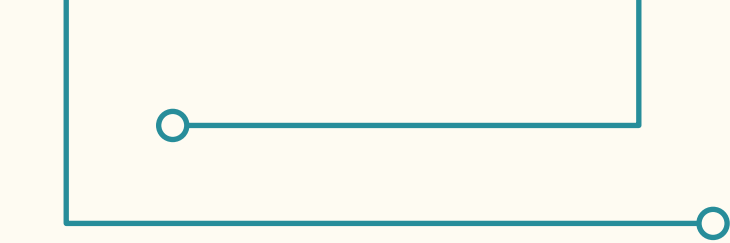


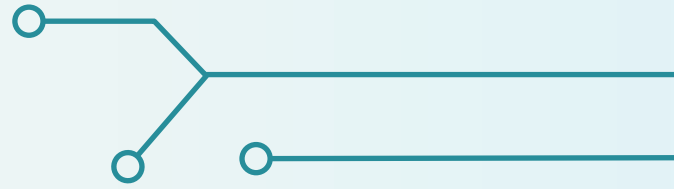
riesgos informativos y discursos de odio antes de que escalen. No obstante, las facultades legales siguen siendo limitadas para intervenir en la infraestructura digital donde se origina la violencia, especialmente en países con menos recursos, lo que exige marcos regulatorios regionales y cooperación internacional.

Lo que tienen en común estas experiencias es que muestran respuestas a la VPGD que van más allá de las sanciones aisladas. Consisten en agendas transformadoras que articulan medidas en diferentes planos: educación digital con perspectiva de género, acompañamiento integral, protocolos de denuncia

claros, compromisos obligatorios de los partidos, cooperación regional, corresponsabilidad de las plataformas y un fortalecimiento sostenido de la sociedad civil. Lo que está en juego es la reconstrucción de la confianza en la esfera pública digital mediante modelos de gobernanza capaces de distribuir responsabilidades entre instituciones, plataformas y ciudadanía. Solo un pacto de corresponsabilidad a lo largo de todo el ciclo de la información permitirá garantizar que todas las personas puedan participar como iguales en la vida democrática y que la democracia sea realmente plena al proteger, de manera efectiva, las voces que la constituyen.







El periodismo y la cultura de verificación en el nuevo entorno informativo

La evolución del ecosistema informativo en la era de la digitalización da al periodismo una nueva responsabilidad con la democracia. A su misión histórica de informar y fiscalizar el poder, hoy se suma su rol en la recomposición del vínculo entre verdad, instituciones y ciudadanía. La desinformación funciona como acelerador del desencanto democrático, obligando a los medios a ejercer una independencia editorial activa y a entender la verificación como práctica de defensa institucional de la democracia. Pues esta no se limita a la corrección de datos, sino a la recomposición de las condiciones sociales que permiten creer en una realidad compartida, el elemento cognitivo básico de la democracia como sistema político basado en el consentimiento de los gobernados.

Así, el Encuentro Regional fue el centro de discusión de diferentes medios independientes que

compartieron sus experiencias en contextos muy disímiles. En Perú, Ojo Público reveló que la verificación no puede quedar restringida a audiencias digitalizadas. Tras constatar que su alcance se concentraba en zonas urbanas, el medio optó por redefinir su impacto al producir contenidos en lenguas originarias, articular alianzas con radios locales y desplegar programas piloto de alfabetización mediática en escuelas rurales. De cara a las elecciones de 2026, su estrategia busca que comunidades diversas comprendan cómo operan los medios, cómo se detectan falsedades y cómo distinguir hechos de propaganda.

Mala Espina Check en Chile ha explorado otro camino, pero con un espíritu afín. Se trata de convertir la educación cívica en resistencia democrática. Frente a las campañas de manipulación observadas durante el proceso constituyente y los debates presidenciales, desarrollaron talleres participativos para enseñar a identificar narrativas de odio, sesgos afectivos y contenido viral engañoso. Para ello, han incorporado IA, comparadores interactivos y formatos pedagógicos breves demostrando que la tecnología, bien orientada, puede fortalecer la capacidad crítica.



En ambos casos se mencionó como un factor decisivo en los giros estratégicos la erosión de la cooperación con plataformas digitales que antes financiaban y promovían la verificación. La retirada de estas alianzas significó que los medios debían reinventar sus modelos de sostenibilidad y fortalecer sus vínculos comunitarios. La vía de Ojo Público fue el arraigo territorial, mientras que Mala Espina optó por la participación activa. En un escenario de incertidumbre regulatoria y dependencia tecnológica, estas estrategias tienen en común la confianza en que la resiliencia periodística pasa por reconstruir las relaciones de confianza con la ciudadanía.

En otros países, el desafío es aún más severo. México es uno de los contextos más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Ante ello, ARTICLE 19 apuesta por la integridad de los periodistas mediante un enfoque de seguridad integral que abarca aspectos físicos, legales, emocionales y digitales. Por eso, se han

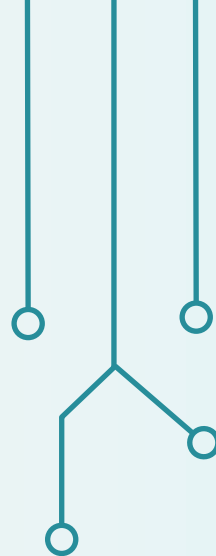
concentrado en alertar sobre los riesgos tecnológicos como el uso indiscriminado de datos biométricos o tecnologías de vigilancia sin controles democráticos. También han realizado numerosos talleres de formación de autocuidado y verificación ética para otros periodistas, intentando habilitar condiciones mínimas para el ejercicio de la libertad de prensa en contextos adversos.

Guatemala ofrece otra experiencia clave. Fáctica de Agencia Ocote entendió que verificar también es traducir y democratizar el acceso lingüístico. Su proyecto *La Luciérnaga* generó contenidos en idiomas mayas para radios comunitarias, reforzando soberanía comunicacional y contrarrestando campañas de desinformación durante la transición que permitió la investidura del presidente Bernardo Arévalo en 2024. El respaldo ciudadano puede ser un escudo fuerte, incluso en un contexto de clausura democrática, así verificar implica también reconstruir la legitimidad cívica de los medios.



"La verificación de información no solo corrige errores, también actúa como un mecanismo de control democrático sobre quienes ejercen poder".

Alex Maldonado, Editor Fáctica, Ocote, Guatemala.



Si en México la violencia amenaza el ejercicio de la función periodística y en Guatemala las presiones políticas imponen restricciones a la libertad de prensa, países como El Salvador son también contextos hostiles para el periodismo independiente debido a su deriva autoritaria. En El Salvador, el medio Gato Encerrado fue empujado al exilio, y por ello ha debido reinventar su labor para informar desde fuera. Su estrategia combina redes locales, radios comunitarias y canales alternativos para mantener conexión con su audiencia. En un entorno donde la infraestructura digital está intervenida, la radio se convierte en refugio democrático, y las redes de confianza se vuelven esenciales para superar el miedo que induce al aislamiento. Su experiencia es una valiosa muestra de cómo, incluso desde el exilio, el periodismo puede sostener vínculos de verdad y cuidado político.

Todas estas experiencias confirman que el periodismo no es un actor neutral. Su función consiste en preservar las condiciones de posibili-

dad de la verdad. Pero esta misión ocurre en un ecosistema donde la precariedad económica, los ataques digitales y la concentración de medios debilitan la libertad editorial. Ante eso, muchos medios están explorando nuevas formas de sostenibilidad como suscripciones comunitarias, fondos locales o alianzas internacionales para reducir dependencias y fortalecer la independencia. Por esta razón, es esencial que las instituciones públicas vean la cultura de la verificación como una práctica que apoyar y sostener.

Cada una de las innovaciones que se abordaron en el evento es, en el fondo, una apuesta por rehacer el pacto social de la información. La integridad de las elecciones es, al fin y al cabo, mucho más que un asunto de tribunales y organismos del Estado. Se trata de una tarea colectiva que involucra a periodistas, plataformas y ciudadanía. Verificar, cuidar y educar emergen como tres funciones cívicas del nuevo periodismo democrático. De su capacidad para sostener ese equilibrio dependerá buena parte de la esfera informativa de la región.





Conclusiones

La reflexión final del Encuentro Regional identificó que tanto la desinformación como la VPGD son síntomas estructurales de un ecosistema informativo en acelerada transformación. Las plataformas digitales reconfiguran la relación entre verdad, emoción y poder; los algoritmos amplifican el agravio; y las disputas electorales se juegan tanto en la deliberación pública como en los circuitos de atención digital. Ante este escenario, quedó claro que ninguna institución puede enfrentar sola estos riesgos. La resiliencia democrática depende de la acción coordinada entre organismos electorales, medios, plataformas, sociedad civil y ciudadanía, y de un enfoque de derechos y de igualdad de género que oriente todas las intervenciones. Por eso, la clave para la democracia es fortalecer la resiliencia de los ecosistemas de integridad electoral.

Sobre esta base, el Encuentro Regional produjo un decálogo destinado a traducir las preocupaciones comunes en un marco mínimo de acción interinstitucional. Más que un listado técnico, constituye una hoja de ruta para orientar la acción frente a los desafíos identificados.



"Estamos en un momento complejo para la democracia a nivel global. Sucumbir a una sensación de pesimismo es algo recurrente, nos pasa a todos y todas. Pero no todo está predeterminado. La humanidad está repleta de historias de resiliencia. Las democracias y los pueblos latinoamericanos han sabido resistir y salir de momentos muy oscuros".

Marcela Ríos, Directora Regional para América Latina y el Caribe, IDEA Internacional.



"Culminamos este Encuentro Regional con un gran consenso: colaboración, alianzas amplias y plurales y sobre todo consistencia en el tiempo. Nadie y ninguna institución puede hacerlo solo".

Alejandra Sepúlveda, Gerente de Proyecto Integridad Electoral y Género RLAC, IDEA Internacional.



Decálogo

- **Construcción de comunidades de acompañamiento y cuidado colectivo.** Es necesario crear o reforzar vínculos de apoyo que incluyan asistencia psicológica, asesoría legal, contención comunitaria y redes de protección territorial para las víctimas de VPGD.
- **Adoptar una mirada territorial volviendo a conectar con la capilaridad social.** Los actores del ecosistema de integridad electoral, tales como los organismos electorales o los medios de comunicación, deben realizar esfuerzos por recomponer su vínculo con escuelas, radios comunitarias, espacios barriales, comunidades de fe, entre otros actores que componen el tejido de la sociedad. Por ello, se propone promover campañas que utilicen lenguajes no sexistas y sensibilicen sobre la VPDG y la desinformación.
- **Crear una comisión interinstitucional permanente para abordar la desinformación y la violencia política de género digital.** Necesidad de un espacio estable de coordinación que cuente con metas verificables, protocolos de respuesta, indicadores y mecanismos de seguimiento. Esta comisión debe articular a instituciones electorales, ministerios, fiscalías, organismos de igualdad de género, academia y sociedad civil, asegurando que la respuesta no dependa de voluntades individuales ni de coyunturas electorales.
- **Promover educación digital temprana como política de Estado.** El alfabetismo digital debe comenzar en las primeras etapas del sistema educativo. Niñas, niños y jóvenes necesitan herramientas para identificar manipulación emocional, discursos de odio, estereotipos y contenidos engañosos.
- **Establecer un espacio de negociación con plataformas para condiciones mínimas de trazabilidad.** Crear una mesa permanente de diálogo para acordar rutas de emergencia durante procesos electorales, acceso a datos, transparencia algorítmica y tiempos de respuesta. La formalización de mecanismos de cooperación es un factor relevante en el abordaje conjunto de los retos de la

integridad electoral, lo que puede escalar a instancias regionales.

- **Fortalecer el periodismo colaborativo y territorial.** Los medios y equipos de verificación deben comprometerse a investigar estructuras de desinformación, transparentar criterios editoriales y acercar la verificación a las comunidades. La información verificada adquiere legitimidad cuando circula en lenguajes locales y a través de actores de confianza. El periodismo debe integrar educación cívica, la participación comunitaria y la producción colaborativa de contenidos para reconstruir la confianza pública.
- **Documentar el rol de las autoridades electorales y garantizar transparencia activa.** Los medios y verificadores son aliados potenciales para la documentación sistemática de la labor de los organismos electorales, sus decisiones, procesos y protocolos. Una ciudadanía informada sobre cómo funcionan las elecciones es menos vulnerable a rumores de fraude o campañas de descrédito.
- **Construir observatorios ciudadanos y métricas comparables so-**

bre desinformación y violencia política de género.

La creación de observatorios especializados que produzcan datos comparables sobre patrones de agresión, narrativas en circulación, brechas territoriales y eficacia de las respuestas institucionales permitirían generar evidencia para políticas públicas, identificar tendencias antes de que escalen y fortalecer la rendición de cuentas en materia de derechos digitales.

- **Garantizar transparencia electoral mediante acceso abierto a información clave.** Impulsar la publicación abierta de actas electorales, auditorías externas, datos de financiamiento y procesos de depuración de padrones.
- **Impulsar acuerdos multiactor para una gobernanza democrática del espacio digital.** Establecer alianzas entre Estado, plataformas, academia, medios, organizaciones de mujeres y sociedad civil para acordar estándares comunes de trazabilidad, protocolos de moderación y mecanismos de supervisión con perspectiva de derechos humanos y género.



Este evento es co-auspiciado por

